

C.A. de Valdivia

Valdivia, once de agosto de dos mil veintidós.

Vistos:

Comparece el abogado defensor particular don Salvador Andrés General Placencia, en representación de don Joelmi Medina Camilo, quien recurre de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada el quince de junio de dos mil veintidós, por medio de la cual se condenó a su representado a las penas de cinco años y un día de presidio más multa de 40 UTM por el delito de tráfico de drogas, tres años y un día de presidio por el delito de porte de arma de fuego y sesenta y un días de presidio más multa por 5 UTM por el delito de receptación de la misma arma.

Funda su recurso en la causal prevista en el artículo 374 letra e) en relación a lo dispuesto en el artículo 342 letras c) y d). En subsidio, la causal prevista en el artículo 373 letra b).

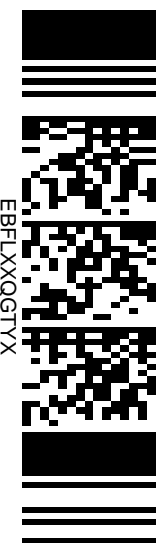
En la audiencia de rigor se presentó por la recurrente el mismo abogado, sosteniendo sus fundamentos. Por el Ministerio Público compareció el fiscal don Sergio Carmona, quien solicitó rechazar el recurso destacando que el perito armero indicó que el arma era apta para el disparo, pues se puede cargar manualmente. Por otra parte destacó la cantidad de droga incautada.

OIDOS Y CONSIDERANDO:

I.- CAUSAL PRINCIPAL DE NULIDAD, ARTÍCULO 374 LETRA E)

PRIMERO: La causal se sostiene principalmente en estimar que ha existido una valoración de la prueba errada. Cita los relatos de los funcionarios de carabineros Srs. Álvarez y Tureuma quienes afirmaron que no existía denuncia por sustracción del arma en los registros de Carabineros. De igual modo destaca que el perito armero Sr. Machant indicó que al arma le faltaba el cargador y que no se incautó munición. Reprocha el que el perito no haya hecho el ejercicio de cargar el arma y comprobar que estaba apta para el disparo.

Agrega que el fallo no se hizo cargo de todas sus alegaciones y que la decisión de considerar el arma apta como arma de fuego a pesar de estar



incompleta por carecer de cargador, y estimar que cumpliría su función porque puede ser cargada manualmente, se apartaría de principios científicos afianzados. Tampoco se alude a normas, doctrina o jurisprudencia que respalden esa decisión.

En el considerando décimo del fallo se indica “A partir de los dichos de Juan Alfredo Morales Neira se tiene por acreditado que el arma incautada había sido objeto de un delito de robo denunciado por su propietario el 8 de febrero de 2020 y el perito armero Ervin Arturo Marchant Ramírez dio cuenta de la pericia del arma incautada describiéndola con regular estado de conservación, irregular funcionamiento mecánico al carecer de cargador, pero advirtiéndola apta para el disparo a partir de un procedimiento manual de insertar un cartucho balístico en la recámara, aspecto que comprobó. Con la documentación pertinente se acreditó que el acusado carece de armas inscritas, así como de autorización para portarlas”, es decir consideró directamente la prueba pertinente, por una parte que el arma provenía de un delito que fue denunciado oportunamente, luego que el condenado no tenía permiso para portar esa arma y finalmente que por medio de la pericia pertinente se determinó que el arma se encontraba apta para el disparo.

Así mismo consta en el considerando octavo que la defensa no rindió prueba particular, adhiriéndose a la del ministerio público.

La recurrente ha entendido que la misma prueba considerada por el tribunal en realidad no es suficiente para establecer hechos constitutivos de delitos. Aunque no es muy clara en su exposición, ha de entenderse que se refiere tanto al delito de porte de arma de fuego como al de receptación de la misma especie. En ese sentido cuestiona la calificación del objeto como arma de fuego, básicamente por no constar con su cargador ni municiones. Sin embargo, el tribunal tuvo como suficiente la prueba del perito en el sentido que refirió sin dudar que el arma estaba apta para su percusión, agregando que ello lo comprobó. De la lectura del relato del perito se advierte que disparó dos veces y se produjo correctamente el disparo. La mayor o menor dificultad para realizar el disparo no es un elemento del tipo, sino su real y efectiva aptitud para ello, lo que incluso se pudo comprobar mediante su uso, es decir cumple con el requisito de ser un elemento con capacidad de fuego, peligrosidad que es la recogida en la norma.



En ese sentido el fallo refuerza su conclusión en el considerando duodécimo al señalar “En lo relativo al porte ilegal de arma de fuego se verifica, porque fue sorprendido portando un arma cuya aptitud para el disparo fue constatada por la pericia respectiva sin que el elemento estuviese inscrito a su nombre y sin poseer autorización alguna que le posibilitase dicho porte. El hecho que el arma estuviese incompleta al carecer de un cargador no la torna inapta ni desmerece el ilícito, pues como bien explicó el perito la pistola puede ser utilizada siguiéndose un proceso de carga manual”.

SEGUNDO: respecto el delito de receptación el fallo indica “Finalmente, con relación al delito de receptación, para la mayoría de los integrantes de la sala se configura, habiéndose acreditado suficientemente con los dichos del funcionario de Policía de Investigaciones que se recibió una denuncia sobre el arma por su propietario quien daba cuenta de su sustracción. En nuestro país rige una legislación estricta en torno a las armas, en que para portar una se requiere mantenerla debidamente inscrita y poseer autorizaciones y condiciones especiales que lo posibiliten. En este caso no se verifica ninguna de dichas circunstancias en el acusado quien portaba un arma apta para el disparo de la cual no puede sino menos que conocer el origen ilícito, al tratarse de un arma incompleta, carente de cargador, incluida en un bolso contenedor de otros elementos ilícitos, como lo es la droga. Es innegable en este escenario que el arma tiene un origen ilícito y está vinculada a la comisión de nuevos ilícitos al servir de medio para procurar defensa e impunidad en el tráfico de drogas”. De esta manera el tribunal ha aplicado la normativa interna, tanto en cuanto al conocimiento presumido de las normas como al contenido específico de aquellas aplicables al caso, hecho que la defensa no desvirtuó durante sus alegatos, ni tampoco el acusado que guardó silencio. Por otra parte, el tribunal refiere la consecuencia lógica de tal conocimiento, es decir, que no pudo menos que saber el origen ilícito de esa especie que requiere de especiales requisitos para su tenencia y porte, los que el condenado no cumple.

La posibilidad de provenir la especie de un hecho distinto a los contemplados en la norma, que justifique la atipicidad, debió ser acreditada por la defensa, sin que conste que ellos se haya ofrecido, por lo que la



prueba existente ha sido ponderada en su contexto, ausente de alguna que la controvierta.

En consecuencia no se advierte ni error en la ponderación de la prueba ni omisión de valoración probatoria, lo que lleva a esta Corte a rechazar esta causal de nulidad.

II.- CAUSAL SUBSIDIARIA, ARTÍCULO 373 LETRA B)

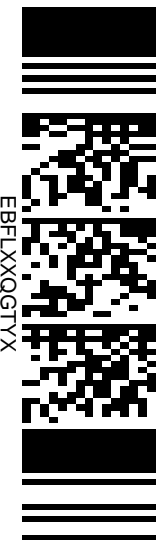
TERCERO: En forma subsidiaria, considera que concurre la causal de error al aplicar el derecho, pues el tribunal no expresó los motivos legales o doctrinales. Centra sus alegaciones en el delito de receptación, compartiendo el voto de minoría. Considera que no se cumplen los requisitos legales de conocimiento real o ficto del origen de la especie. Para ello el tribunal se valió exclusivamente del relato de un funcionario de la PDI que indicó que se recibió denuncia de la sustracción por parte de su propietario.

Como se dijo en el considerando precedente, las prueba recibida en juicio, valorada en ausencia de otra prueba que ofrezca una explicación alternativa, permiten asentar los hechos que justifican la existencia del aquel ilícito. En particular la prueba consistió en el relato de dos funcionarios aprehensores, el perito armero y el funcionario de la PDI que dio cuenta de la denuncia de robo del arma.

La recurrente expresó que no se habría acreditado el conocimiento del origen ilícito del arma, ni aún la posibilidad de presumirlo. Es decir, pretende una valoración distinta de la prueba lo que permitiría concluir que ese requisito no se cumple, tal pretensión no es un error al aplicar la ley. El tribunal precisamente lo ha hecho es analizar los hechos probados a la luz de la ley, llegando a una cotejo normativo que no satisface a la recurrente, pero ello no es una infracción de derecho, y como se dijo en los considerando precedentes tampoco ha sido, en este caso, un error de valoración de prueba.

Lo anterior impide que este causal de nulidad sea recogida por esta Corte.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372 y 384 del Código Procesal Penal, se **RECHAZA** el recurso de nulidad deducido por la defensa del imputado Joelmi Medina Camilo, por lo que no es nula la sentencia de quince de junio de dos mil veintidós, dictada



en causa RIT 39 - 2022 del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, como tampoco lo es el juicio oral que lo antecedió.

Redactada por la Ministra Titular María Soledad Piñeiro Fuenzalida.

Regístrese, notifíquese y agréguese a la carpeta digital.

N°Penal-751-2022.



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia integrada por los Ministros (as) Marcia Del Carmen Undurraga J., Maria Soledad Piñeiro F. y Abogado Integrante Alejandro Duran R. Valdivia, once de agosto de dos mil veintidós.

En Valdivia, a once de agosto de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

